

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**



SALA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinte (20) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024)

Mediante escrito allegado a través del correo electrónico a la Secretaría de esta Corporación, el procurador judicial de la parte actora, solicita se fije fecha para la realización de la audiencia o, se declare la falta de competencia para continuar con el conocimiento del asunto, de la manera descrita en el artículo 121 del CGP.

Respecto a dicha solicitud, el aludido mandato no aplica en materia laboral, y en ello este Despacho comparte los pronunciamientos de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que, en reciente pronunciamiento, mediante sentencia STL 1523 de 17 de febrero de 2021, con ponencia de la Doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, se expuso:

“...Acorde con el criterio fijado por esta Sala de la Corte, entre otras, en sentencias CSJ STL5866-2018, CSJ STL7976-2018, CSJ STL 16122-2018, CSJ STL 4698-2019, CSJ STL 14036-12019, CSJ STL 15397, CSJ STL 16084-2019 y CSJ STL 16474-2019, según el cual el artículo 121 del Código General del Proceso no es aplicable al procedimiento laboral por cuanto esta especialidad tiene sus propias disposiciones que regulan la materia...”.

Resulta claro para el Despacho que el artículo 121 del Código General del Proceso, no entra dentro de la remisión normativa que dispone el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues los esquemas normativos procedimentales de la especialidad civil y laboral presentan diferencias que no permiten la analogía en el punto propuesto, esto es la forma de realización de audiencias y el trámite tanto de la primera como de la segunda instancia.

Ahora, esta Sala no desconoce que la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-334 de 2020, encontró procedente la aplicación del mandato en comentario en materia laboral, empero ello fue dentro de un trámite de tutela, cuyos efectos permiten a este operador judicial apartarse de la decisión por, tres razones, a saber:

La primera tener efectos “*inter partes*”, es decir, solo vinculó a quienes hicieron parte de la respectiva actuación, más que en dicha ocasión la decisión fue de improcedencia de la acción por hecho superado.

En segundo término, si en gracia de discusión se aceptara tal postura, ella no es de aplicación objetiva, dado que el mero transcurso del tiempo no llevaría aun juzgador, ni siquiera de la especialidad civil o de familia, a perder competencia de los asuntos sometidos a su decisión, pues son múltiples factores, dentro de los que se incluye la congestión judicial, que conlleva a que se sobrepase el término de un año o seis meses para la primera o segunda instancia respectivamente.

En tercer lugar, la igualdad referida en la sentencia de la Honorable Corte Constitucional en comentario, implica como la misma doctrina lo ha definido “*tratamiento igual para los iguales*”, la cual no se presente si se comparan las especialidades civil y laboral, pues en esta última el sistema procesal es bastante generoso con las providencias a ser consultadas, implican revisar en segundo grado toda sentencias adversas a la nación en su sentido amplio, entidades en que esta sea garante, los trabajadores y los afiliados al sistema de seguridad social integral, a más del trámite de las apelaciones, lo que crea de por sí un desequilibrio de las cargas laborales que no permiten igualar en trato procesal a que nos hemos venido refiriendo a unos y otros.

Conviene resaltar que mediante sentencia **STP 8824 de 1º de octubre de 2020**, la Corte Suprema de Justicia, dentro de acción de tutela adelantada contra la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Cali, motivada por una presunta morosidad de la oficina judicial, indicó que:

“...En este punto de la discusión, resulta válido detenerse a explicar la situación de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali y, en concreto, el despacho 008, a efectos de analizar a profundidad la queja de la accionante, porque, objetivamente, su proceso ha durado más de 10 años y todavía no ha sido resuelto. Así, se observa que dicha Corporación, estadísticamente, alcanzó el valor óptimo de evacuación parcial para el año 2018, donde el mencionado valor corresponde al 100% de productividad. El despacho 008, por su lado, obtuvo 118,23%.

...

Al contrastar la carga laboral de la mencionada agencia judicial con su alta producción en las fechas indicadas, se advierten dos circunstancias neurálgicas: (i) congestión judicial por la excesiva demanda de justicia en esa área del país, en cuanto a la especialidad laboral; e (ii) ingentes esfuerzos por parte de la Magistrada accionada, así como de su equipo de trabajo, para tratar de menguar tal situación, al punto que su producción supera la del promedio...”.

A título ilustrativo es menester dejar sentado que, en similares circunstancias a la antes descritas, se encuentra el suscrito magistrado, pues se tomó posesión del cargo el 2 de diciembre de 2019, con un inventario de 749 procesos, sumado al nuevo reparto y las acciones constitucionales.

Por otro lado, se le informa a la parte, que conforme al turno de llegada del proceso y las previas solicitudes de priorización elevadas por los varios usuarios del Despacho se deben resolver primero los procesos anteriores al que refiere la presente petición, ello sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 446 de 1998 que permiten las sentencias por unidades temáticas y se itera las priorizaciones en razones objetivas múltiples como lo son situaciones de vulnerabilidad de los accionantes, entre otras.

Siempre ha sido el propósito del Despacho garantizar el principio constitucional de acceso a la administración de justicia, mediante la aplicación de los principios orientadores del proceso judicial, cuales son, entre otros, los de celeridad y eficiencia. Empero, el cumplimiento de tales postulados no depende de la voluntad o querer del operador judicial, pues entran en juego factores objetivos, que no son posible soslayar, como son los relacionados con la congestión judicial.

Razones las anteriores, para no acceder a la solicitud elevada por el apoderado de la parte actora en el sentido de abstenerse de seguir conociendo la actuación según la regla establecida en el artículo 121 del Código General del Proceso.

Ahora, respecto a la solicitud expresa de fijación de fecha, ello no se encuentra establecido dentro del trámite previsto en la ley 2213 del año 2022.

En mérito de lo expuesto y sin necesidad de otras consideraciones, el despacho

RESUELVE:

Negar por improcedente la solicitud elevada por la apoderada de la parte demandante.

Notifíquese

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

Magistrado

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL
- HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° 30 del 21 de febrero del año 2024

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/161>

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ad73eae95d27ef070fcee4e1a99a818350be50cd817365933e05f5fedf0ddf0f**

Documento generado en 20/02/2024 11:49:43 a. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>